

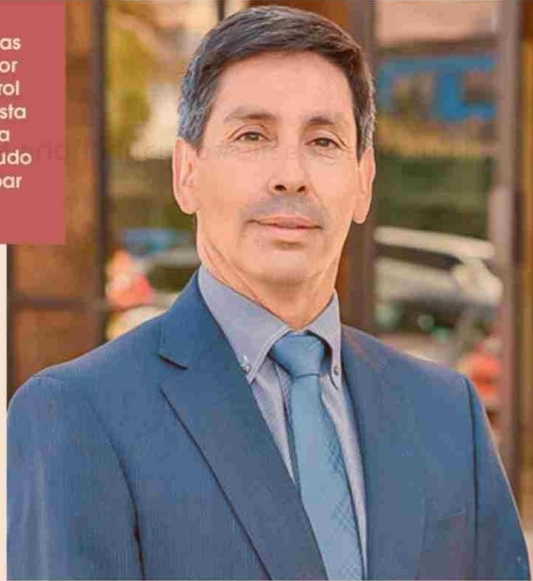
SICEP ANALIZA EL ESCENARIO QUE VIENE EN UN AÑO MARCADO POR INVERSIONES Y DESAFÍOS DE PERMISOLOGÍA

Ricardo Muñoz, gerente de la plataforma SICEP, revisa las últimas cifras entregadas por Cochilco, profundiza en el rol clave que tendrá Antofagasta el próximo año y advierte la urgencia de destrabar el nudo de los permisos para aprobar proyectos.

POR MACARENA PACULL M.

Las proyecciones para la industria minera en el año 2025 son positivas. Así lo plantea Ricardo Muñoz, gerente de SICEP, la plataforma que agrupa a un número significativo de proveedores de la industria.

Si bien se espera un menor crecimiento del consumo de cobre en China (alrededor de 1%), Muñoz asegura se vería compensado, en parte, por una expansión del 4% en el resto del mundo, siendo Europa y Estados Unidos los principales generadores del crecimiento de la



demanda, mientras que el precio de la libra de cobre se proyecta en un promedio anual de US\$ 4,25.

El ejecutivo destaca lo reportado recientemente por Cochilco en el último catastro de la cartera de proyectos de inversión en minería para el período 2023-2032, donde se esperan inversiones del orden US\$ 83.181 millones. En ese escenario, Antofagasta se proyecta como la más importante, dice, con una inversión que se espera alcance los US\$ 31.318 millones, que representan el 38% de la inversión total proyectada.

"Estamos hablando de una nueva ola de inversiones, donde Antofagasta es región líder, con anuncios concretos como los US\$ 7.500 millones para la expansión de El Abra, los US\$ 7.500 millones que está desarrollando Antofagasta Minerals o los US\$ 10.800 millones que considera el plan de crecimiento de Escondida BHP, la más alta desde el inicio de sus

operaciones en 1991. Sin duda, todas estas inversiones son también una muy buena noticia para las empresas proveedoras", destaca.

No obstante, para seguir avanzando, aún hay obstáculos por superar. Muñoz sostiene que se debe avanzar en la permisología, un tema que, asegura, ha sido debate permanente durante el 2024. "No es posible que un proyecto de inversión requiera miles de permisos, ni que los tribunales ambientales demoren en promedio 415 días en dictar una sentencia", expone. Esto, según comenta, no implica una relajación de los estándares regulatorios, pero "se necesita con urgencia un enfoque basado en criterios técnicos, plazos razonables y procedimientos eficientes".

Otro desafío se liga a la articulación público-privada, como el fortalecimiento de proveedores, la formación de capital humano y empleo local y el desarrollo de las mineras, entre otros puntos. A su juicio, el diálogo permanente es crucial para aunar fuerzas en el marco de materializar el boom de inversiones e identificar y priorizar proyectos estratégicos para un desarrollo sostenible, como más proveedores intensivos en educación, inclusión femenina, desarrollo urbano, entre otros. "En suma, transformar las oportunidades en realidades, para una minería y región sostenible", puntualiza.